

**TRIBUNAL SUPREMO  
SALA PRIMERA**

**GABINETE TÉCNICO**



---

**SENTENCIAS FIRMADAS  
DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2025,  
SECCIÓN 2ª**

---

**D. Ignacio Sancho Gargallo, presidente  
D. Rafael Sarazá Jimena  
D. Pedro José Vela Torres  
D. Manuel Almenar Belenguer**

---

Agustín Pardillo Hernández,  
Letrado del Gabinete Técnico.

**1.- SENTENCIA 378/2025, DE 11 DE MARZO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 1191/2020**

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres

Votación y fallo: 06/03/2025

**Materia:** Comercialización de participaciones preferentes convertibles en obligaciones subordinadas convertibles, a su vez, en acciones del Banco Popular S.A. Aplicación de las SSTJUE de 5 de mayo de 2022 y 5 de septiembre de 2024.

*«[...] el TJUE concluyó que la Directiva 2014/59 excluye el ejercicio de las acciones de responsabilidad o de nulidad e impide que «quienes hayan adquirido acciones [...] ejerciten contra esa entidad [...] o contra la entidad de que suceda, una acción de responsabilidad [...] o una acción de nulidad».*

*4.- Esta Sala Primera del Tribunal Supremo tenía alguna duda sobre la incidencia de la doctrina contenida en esa sentencia del TJUE a un asunto similar al presente, en que las participaciones preferentes adquiridas eran instrumentos de capital adicional de nivel 1 emitidos por el Banco Popular, que antes de la decisión de resolución del banco se habían canjeado, primero, por bonos subordinados obligatoriamente convertibles (marzo de 2012) y más tarde, por acciones de Banco Popular (2014). La duda en aquel caso era si el crédito o derecho que surgiría de la condena a restituir como consecuencia de la nulidad de la adquisición de un instrumento de capital (en aquel caso participaciones preferentes) que acabó convirtiéndose en acciones antes de que se hubiera adoptado las medidas de resolución al Banco Popular (7 de junio de 2017), sería un pasivo afectado por la previsión de los arts. 53.3 y 60.2.b) de la Directiva 2014/59.*

*Eso motivó la formulación de la cuestión prejudicial al TJUE, que ha sido resuelta por sentencia de 5 de septiembre de 2024 (asuntos acumulados C-775/22, C-779/22 y C-794/22) [...]*

*5.- El Tribunal de Justicia deja claro que los pasivos que pudieran derivar de la eventual nulidad de la adquisición de las participaciones preferentes (convertidas en deuda subordinada y luego en acciones, antes de la decisión de resolución de Banco Popular) en ningún caso formarían parte de esos «pasivos ya devengados» a los que se refiere la exclusión de los efectos liberatorios de la amortización contenida en el artículo 60.2.b) Directiva 2014/59, ni de las obligaciones o reclamaciones ya vencidas en el momento de la Decisión de resolución a que se refiere el artículo 53.3 Directiva 2014/59. Razón por la cual en nuestro caso el Sr. X carece de legitimación para la acción que ejercita frente a Banco Santander. Si, como afirma el TJUE, la Directiva 2014/59 impide el ejercicio de una acción de responsabilidad o de una acción de nulidad contra la entidad de crédito que comercializó las participaciones preferentes (convertidas en deuda subordinada y luego en acciones), o contra la entidad que la suceda con posterioridad a la adopción de la decisión de resolución, desaparece ese presupuesto esencial de la acción ejercitada en la demanda.*

*Estas circunstancias han privado a las pretensiones del demandante – ahora recurrido en casación– del fundamento que pudieran tener si no se hubiera producido la resolución del banco, ya que esta sala, por mandato del art. 4 bis LOPJ, debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante, de modo*

que tales pretensiones nunca podrían ser estimadas». Se estima el recurso de casación.

**2.- SENTENCIA 384/2025, DE 13 DE MARZO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 2890/2020**

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Votación y fallo: 27/02/2025

**Materia:** Accidente de circulación. Concurren a la reclamación de la indemnización correspondiente al ascendente progenitor paterno el padre biológico de la víctima, que desde que era pequeño este último dejó de ocuparse de el, y el quien se casó en segundas nupcias con la madre de la víctima que de hecho se ocupó de su atención y cuidado. Interpretación de los arts. 62.3 y 67 Ley Sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (LRCSCVM). Allegado (art. 67) y perjudicado por analogía (art. 62.3) son categorías incompatibles, en cuanto que no se puede ser una y otra al mismo tiempo. Allegado es, por definición legal, quien reúna los requisitos del art. 67 «sin tener la condición de perjudicado según las reglas anteriores».

*«El común denominador de todos los perjudicados en el nuevo sistema es el vínculo afectivo que existe entre el perjudicado y la víctima. Este vínculo afectivo se presume existente en el caso de perjudicados pertenecientes a alguna de las citadas cinco categorías del art. 62.1 TRLRCSVM: en el caso de los familiares expresamente indicados (el cónyuge viudo, los ascendientes, los descendientes y los hermanos), por razón del ese vínculo familiar; y en el caso de los allegados (que pueden ser familiares distintos de aquellos o no familiares), por razón de la convivencia con la víctima durante el tiempo legalmente establecido (cinco años anteriores a su fallecimiento). Por el contrario, en el caso de los perjudicados funcionales o por analogía del art. 62.3 TRLRCSVM, el vínculo afectivo ha de ser probado y resulta de que el perjudicado ejerza la función u ocupe la posición de uno de esos familiares nominados.*

*La importancia del vínculo afectivo, fundamento de la existencia de un perjuicio reflejo a resarcir, se traduce en que la inexistencia de ese vínculo permite excluir el derecho al resarcimiento de cualquier perjudicado (art. 62.2 TRLRCSVM) [...]*

*6. En nuestro caso, se trata de reconocer el derecho indemnizatorio al perjudicado por analogía que, de facto y de forma continuada, ejerce las funciones del ascendente progenitor (esto es, las inherentes a la patria potestad conforme a los arts. 154 y ss. CC, consistentes en velar por los hijos, convivir con ellos, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral), no por inexistencia del progenitor, sino por incumplimiento de este. El reconocimiento del derecho del perjudicado funcional o por analogía exige que el progenitor incumpla sus deberes legales (que deje de prestar sustento económico y emocional), hasta el punto de que con ello desaparezca el vínculo afectivo, y, correlativamente, que sea la persona que ejerce las funciones del padre incumplidor en lugar de este la que, con su conducta continuada, cubra las necesidades económicas y emocionales de la víctima hasta su fallecimiento, generando con ello ese vínculo afectivo sin el cual no cabe reconocerle perjuicio a resarcir.*

*Al ocupar el perjudicado por analogía la posición del perjudicado incumplidor, la condición de perjudicado de uno (el primero) excluye la del otro.*

*7. La resolución recurrida se acomoda a esta interpretación legal, a la vista de lo acreditado en la instancia, que no es posible alterar ahora en casación: el recurrente desatendió de una forma absoluta sus obligaciones para con sus hijos, entre ellos el que luego falleció, como mínimo desde la separación matrimonial en 1998, ya que apenas mantuvo contacto con ellos, no se preocupó de su educación y desarrollo, ni les proveyó de lo necesario, desde un punto de vista económico, para cubrir sus más elementales necesidades; y fue D, la nueva pareja de la madre, ante el incumplimiento del padre biológico, quien desde que comenzó la convivencia con la madre y los dos hijos del matrimonio bajo custodia materna (en 2005, cuando el luego fallecido tenía trece años) se ocupó de cubrir todas sus necesidades, tanto en el plano material como en el afectivo, generando un vínculo afectivo entre él y los hijos análogo al que cabe presumir existente entre un padre legal (biológico o adoptivo) y sus hijos, cuando no existe desafecto motivado porque el primero no ejerza sus funciones como tal.*

*Al constar acreditado el incumplimiento funcional del recurrente, así como el cumplimiento de facto y continuado de dichas funciones por el recurrido, es correcta la conclusión de la Audiencia de apreciar la concurrencia de los requisitos del art. 62.3 TRLRCSCVM, en relación con el 62.1 del mismo texto legal, y reconocer a D la condición de perjudicado ascendente progenitor paterno por el fallecimiento en accidente de circulación de F». Se desestima el recurso de casación.*

**3.- SENTENCIA 382/2025, DE 13 DE MARZO. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 1210/2020**

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Votación y fallo: 26/02/2025

**Materia:** Pérdida del beneficio del plazo. Interpretación del art. 1129 CC. Se reitera la jurisprudencia. Todos los supuestos que se establecen expresamente en el art. 1129 CC, entre ellos la insolvencia sobrevenida, se fundamentan en el riesgo que suponen para que el acreedor pueda ver satisfecho su derecho de crédito, riesgo que ya se ha materializado cuando el deudor ha incumplido el pago consecutivo de varias cuotas del préstamo y no procede a reparar la situación. En este caso constaba acreditado que los prestatarios habían dejado de pagar 55 cuotas mensuales y los dos inmuebles que estaban gravados y embargados.

*«Los hechos acreditados en la instancia muestran que cuando el acreedor instó la pérdida del beneficio del plazo existía un riesgo manifiesto para el acreedor de ver impagado su derecho de crédito, en la medida en que los prestatarios adeudaban 55 cuotas mensuales vencidas, esto es, llevaban más de cuatro años y medio sin pagar, y además tenían su patrimonio hipotecado y embargado.*

*En la sentencia de 1111/2024, de 16 de septiembre, hemos considerado que el presupuesto de la insolvencia sobrevenida del deudor para la pérdida del beneficio del plazo se cumple claramente en caso de concurso de acreedores, sin que, por otra parte, el art. 1129 CC subordine su apreciación a una previa declaración judicial. En nuestro caso es claro que ha existido un sobreseimiento*

*general en los pagos, que muestra una imposibilidad de hacer frente a los créditos exigibles. Así lo muestra no sólo el impago de las 55 cuotas mensuales, sino también los créditos que justificaron los embargos trabados sobre la finca de los demandados.*

*En cualquier caso, es contrario a la jurisprudencia citada el criterio seguido por la sentencia recurrida que excluye la apreciación de la insolvencia sobrevenida por el mero hecho de que no se hubiera realizado previamente la hipoteca, siempre que los hechos acreditados, entre ellos el número de significativo de cuotas impagadas, prueben el riesgo de impago de las cuotas pendientes de vencimiento». Se estima el recurso de casación.*

**4.- SENTENCIA 392/2025, DE 13 DE MARZO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 3259/2020**

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres

Votación y fallo: 05/03/2025

**Materia:** Adquisición de bonos convertibles en acciones. Renuncia de acciones válida por ser concreta, precisa, informada y no causar perjuicio al cliente.

*«Esta sala, en la sentencia de pleno 677/2019, de 6 de marzo, declaró la nulidad de una renuncia de acciones tras una transacción sobre un previo contrato de adquisición de bonos subordinados convertibles en acciones (de una entidad diferente a la de este caso), por las siguientes y resumidas razones: (i) cuando se produjo la renuncia, la entidad emisora de los productos financieros se encontraba en proceso de resolución, por lo que los inversionistas no tenían otra alternativa razonable, para no perder toda su inversión, atendidas las vicisitudes por las que atravesaba la entidad emisora, que aceptar la oferta, aunque supusiera una nueva pérdida patrimonial y se condicionara a la renuncia al ejercicio de acciones; (ii) a los clientes se les planteaba la disyuntiva de aceptar, en un breve periodo de tiempo, la renuncia a las acciones que pudieran corresponderles por la comercialización de tales productos o arriesgarse a sufrir una pérdida patrimonial inmediata y posiblemente absoluta, de manera que se trató de la imposición de la renuncia a solicitar tutela judicial efectiva en una situación límite de la que el cliente no es responsable; (iii) la contraprestación que obtenía el cliente era imprecisa. Todo lo cual conducía a que dicha renuncia constituyera un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor y usuario, en contra de las exigencias de la buena fe.*

*2.- La sentencia recurrida no desconoce esa jurisprudencia. Al contrario, la analiza correctamente y considera que las circunstancias concurrentes en este caso son diametralmente distintas. En efecto, ello es así. por lo siguiente.*

*Cuando se firmó el acuerdo transaccional con la renuncia de acciones, el banco emisor de las acciones no estaba todavía en proceso de resolución, lo que no tuvo lugar hasta año y medio más tarde; y el banco comercializador, contra el que se dirige la pretensión nunca estuvo en esa tesitura. La contraprestación que obtuvo el cliente era concreta, determinada y precisa: una imposición a plazo fijo al 5% durante cinco años, con un rendimiento total de 4.500 euros, que debe sumarse a los 5.981,90 euros de rendimientos de los bonos y los 2.893,40 de valor de las acciones obtenidas. Como consecuencia de ello, la renuncia de acciones fue válida, eficaz y oponible al inversor, como*

*acertadamente apreció la Audiencia Provincial, por cuanto era expresa, concreta e informada y, además, no empeoró la situación jurídica del cliente». Se desestima el recurso de casación.*

**5.- SENTENCIA 427/2025, DE 18 DE MARZO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 1473/2020**

Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Almenar Belenguer

Votación y fallo: 12/03/2025

**Materia:** Suscripción de productos estructurados, previa cancelación anticipada de los originales y con el mismo nominal. Actuación mediante intermediario. El error vicio del consentimiento debe apreciarse respecto del tercero que realmente trata con la entidad bancaria, por cuenta del titular de la inversión. La nulidad de los contratos que sustituyen a los anteriores comporta la restitución del nominal de la inversión menos los rendimientos percibidos, sin que puedan tenerse en cuenta las eventuales pérdidas que sufriese el producto original, dada la voluntad de las partes de partir del nominal inicialmente invertido.

*«Sobre la base de la apreciación legal de la necesidad que el cliente minorista tiene de conocer el producto financiero que contrata y los concretos riesgos que lleva asociados, y del deber legal que se impone a la entidad financiera de suministrar a dicho cliente una información comprensible y adecuada sobre tales extremos, para salvar la asimetría informativa que podía viciar el consentimiento por error, la normativa MiFID impone a la entidad financiera otros deberes:*

*i) Cuando la entidad financiera opera como simple ejecutante de la voluntad del cliente, previamente formada, debe valorar los conocimientos y la experiencia en materia financiera del cliente, y evaluar si es capaz de comprender los riesgos que implica el producto o servicio de inversión que va a contratar, mediante el denominado test de conveniencia, regulado en el art. 79 bis apartado 7 LMV y los arts. 73 y 74 RD 217/2008, de 15 de febrero.*

*ii) Cuando el servicio prestado es de asesoramiento financiero, como aquí ocurre, además de la anterior evaluación, la entidad debe hacer un informe sobre la situación financiera y los objetivos de inversión del cliente, para poder recomendarle ese producto, por medio del llamado test de idoneidad, regulado en el art. 79 bis. 6 LMV y el art. 72 RD 217/2008, de 15 de febrero.*

*La obligación de información se acentúa cuando la recomendación o asesoramiento tiene por objeto productos especialmente complejos, como son los derivados o estructurados, cuya comprensión requiere, sin perjuicio de la información que pudiere recogerse en el documento contractual, un plus suministrado con la antelación suficiente y que, sobre la base del perfil y circunstancias del destinatario y de las características del producto o de la operación, le permita conocer su funcionamiento y las consecuencias económicas que puedan derivarse de su aceptación, en función de los distintos escenarios que se deben explicar, con los ejemplos y simulaciones necesarias.*

*7.- En el presente caso, no es controvertido que los productos contratados por la demandante, en cuanto que referidos, el primero, a la evolución de una cesta de 25 acciones, y, el segundo, a la evolución de las acciones de BBVA, Vodafone, Repsol, Vivendi y Arcelos Mittal, son productos financieros complejos. Tampoco se discute que Dña. M tenía condición de cliente minorista, conforme*

al art. 79 LMV, al igual que la persona que la asesoraba o intermediaba en su nombre con el banco.

Por ello, Banco Santander estaba obligado a suministrar, con carácter previo a la contratación de estos dos productos financieros complejos, bien a la cliente, bien a la persona que la asistía, una información clara y comprensible que permitiera conocer los riesgos concretos de estos productos, existiendo un servicio de asesoramiento, a realizar los correspondientes test de idoneidad, en su caso.

Según declara la sentencia recurrida -y no se cuestiona-, no se ha probado que la demandada hubiera ofrecido a Dña. M la referida información sobre la naturaleza, características y riesgos que entrañaba el producto. Pero en la medida que se parte de que quien se encargó de las relaciones con el banco fue su cuñado, D. V, se trata de comprobar si la entidad crediticia proporcionó a éste la información suficiente sobre tales extremos [...]

Desde el momento en que no consta acreditado que se hubiera proporcionado una información precontractual suficiente (ni practicado el test de idoneidad respecto de los productos contratados en enero de 2008 y de 2009), y, por tanto, que el banco hubiera cumplido debidamente con los deberes de información del art. 79 bis.3 LMV, sin que, por otro lado, existan elementos para afirmar que D. V tuviera un perfil de inversor dinámico o una formación y experiencia financiera de las que pudiera desprenderse la menor relevancia de aquel incumplimiento, consideramos correcta la conclusión alcanzada por la Audiencia, que aprecia la existencia de error excusable que provoca la anulabilidad del contrato por vicio del consentimiento (arts. 1300 y 1301 del Código Civil)». Se desestima el recurso de casación.

**6.- SENTENCIA 446/2025, DE 19 DE MARZO. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 5119/2019**

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Votación y fallo: 13/03/2025

**Materia:** Ley 57/1968. Demanda contra la entidad bancaria en la que se abrió la cuenta en que se ingresaban las cantidades anticipadas. Cooperativa de viviendas. Cooperativista que solicita su baja de la cooperativa porque tenía problemas económicos que le impedían pagar el precio de la vivienda pues necesitaba el dinero para atender a otros pagos. No estamos ante una «rescisión del contrato», por usar la expresión del art. 3 de la Ley 57/1968, justificada por el incumplimiento de la cooperativa, sino que las demandantes decidieron desvincularse del negocio jurídico que les permitía acceder a la propiedad de una vivienda porque no consiguieron financiación para pagar el resto del precio.

«La solicitud de baja en la cooperativa formulada por el demandante no se basó en el incumplimiento de la cooperativa, sino que el propio demandante argumentó que «[l]os motivos para solicitar la baja son de índole económica ya que debo hacer frente a ciertos pagos que de otra manera me sería imposible afrontar».

En la sentencia 133/2015, de 23 de marzo, entendimos, en un caso en el que se había suscrito un contrato de compraventa de vivienda sobre plano, que la garantía de las cantidades anticipadas no puede subsistir si el contrato de compraventa se extingue por mutuo disenso de comprador y vendedor antes de

*la fecha establecida para la entrega de la vivienda; y que lo que determina la efectividad de las garantías previstas en la Ley 57/1968 es el incumplimiento del vendedor pero no la renuncia anticipada del comprador.*

*En la sentencia 578/2015, de 19 de octubre, se desestimó la demanda de los compradores porque no hubo incumplimiento del vendedor sino voluntad de los compradores de no consumir el contrato de compraventa. Y que, en tales circunstancias, exigir la responsabilidad de la entidad avalista frente a los compradores supone forzar el texto del art. 3 de la Ley 57/1968 hasta el punto de desconectar causalmente por completo la «rescisión» a que dicho artículo se refiere de la expiración del plazo a la que también se refiere, cuando claramente se deduce del propio artículo que esa «rescisión» no es sino una resolución del contrato por incumplimiento del vendedor [...]*

*En conclusión, el demandante solicitó su baja de la cooperativa por razones completamente ajenas a un incumplimiento de esta. Si bien es cierto que había pasado bastante tiempo desde que el demandante se adhirió a la cooperativa hasta que solicitó su baja (unos cuatro años), no fue esa la razón por la que solicitó la baja. No estamos ante una «rescisión del contrato», por usar la expresión del art. 3 de la Ley 57/1968, justificada por el incumplimiento de la cooperativa, sino que el demandante decidió desvincularse del negocio jurídico que les permitía acceder a la propiedad de una vivienda porque tenía problemas económicos que le impedían pagar el precio de la vivienda pues necesitaba el dinero para atender a otros pagos.*

*Por tal razón, conforme a la jurisprudencia que ha sido extractada, no puede exigirse al banco demandado que restituya al demandante la cantidad que la cooperativa debió restituírle por su baja como cooperativista». Se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación.*

**7.- SENTENCIA 449/2025, DE 20 DE MARZO. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 2852/2020**

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Votación y fallo: 13/02/2025

**Materia:** Acción social de responsabilidad por incumplimiento del deber de lealtad. Conflicto de intereses. Contratación de prestación de servicios a sociedades vinculadas y que son competidoras de la propia sociedad.

*«En la estructura de la acción social de responsabilidad, el incumplimiento del deber de lealtad debe haber ocasionado un perjuicio a la propia sociedad, que es el que se pretende indemnizar.*

*La contratación de los servicios reseñados con sociedades vinculadas, sin haber comunicado a la junta de socios el conflicto de intereses que entrañaba respecto del administrador único Sr. C, conlleva un incumplimiento del deber de lealtad, en el que queda en entredicho si en esa contratación y en la supuesta prestación de servicios y su remuneración primó el interés de Solmiplaya.*

*Es muy difícil determinar hasta qué punto los contratos concertados con las sociedades vinculadas respondían a una necesidad efectiva de prestación de servicios y en qué medida se prestaron y pagaron, sin que llegaran a solaparse entre sí prestaciones contratadas y a su vez estas prestaciones se solaparan con la función del administrador de la compañía, que desde 2006 era retribuida.*



*Pero las circunstancias concurrentes en este caso muestran razones para apreciar estimativamente que esta actuación del administrador, que se enmarca en el incumplimiento de un deber diligencia grave, redundó en perjuicio para la sociedad.*

*De los contratos, podíamos distinguir entre el contrato de gestión del establecimiento Apartahotel Salou Pacific de 20 de abril de 2005, con Rodor Apartamentos, y el resto de contratos.*

*El resto de los contratos, sin perjuicio de algún posible solapamiento, se refieren a servicios y suministro de materiales que no es ilógico que se contraten a terceros y que no los presté por sí el administrador de la sociedad, y al mismo tiempo se remuneran por servicios prestados. Uno de estos contratos, es el que se había concertado con Rodor el 2 de enero de 2005. En la medida en que no consta acreditada la inexistencia de los servicios remunerados, respecto de los que se ejercita la acción de responsabilidad, y que tampoco se puede inferir del resto de las circunstancias y hechos acreditados, no pueden ser tenidos ahora en consideración.*

*Sin embargo, el contrato con Rodor Apartamentos de 20 de abril de 2005, en el marco del conflicto de intereses existente, desprende un fumus negativo de innecesariedad y de ser un medio para desviar beneficios de la explotación de los apartamentos titularidad de Solmiplaya a favor de sociedades vinculadas al administrador. En primer lugar porque su objeto es la gestión del apartahotel que es el principal activo de la sociedad (Salou-Pacific), que fácilmente o se puede solapar con la función del administrador o resulta poco necesaria, por varias razones, entre las que destaca que la totalidad de los apartamentos estaban ya contratados en temporada alta con un tour operador irlandés (Budget Travel Ltd), y así fue hasta finales de 2007; también porque no consta que con anterioridad se hubiera encomendado a un tercero y en términos similares estos mismos servicios de gestión; y porque la remuneración era de una comisión del 4% de las ventas netas totales, que recordemos ya estaban sustancialmente aseguradas por el contrato con Budget Travel Ltd. En condiciones normales, la remuneración convenida por la prestación de un tercero de los servicios de gestión hotelera podía estar justificada, pero en este caso no.*

*Esta relación contractual, hasta que no terminó el contrato con el tour operador irlandés apenas estaba justificada, a la vista de los términos de la contratación y desde la perspectiva de los intereses de la sociedad Solmiplaya. Podía estarlo desde la terminación del contrato con Budget Travel Ltd, por la necesidad de promocionar el establecimiento y gestionar la ocupación y explotación de los apartamentos.*

*De ahí que se considere un perjuicio, en cuanto gasto innecesario y medio para desviar hacía una sociedad vinculada con el Sr. C una parte de los rendimientos económicos de Solmiplaya, la retribución abonada por esos supuestos servicios durante los años 2005, 2006 y 2007, incluida la partida con efectos retroactivos a 2004, y que condenemos al Sr. C a su reparación». Se estima en parte el recurso extraordinario por infracción procesal y se estima el recurso de casación.*

**8.- SENTENCIA 400/2025, DE 17 DE MARZO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 3633/2020**

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Votación y fallo: 05/03/2025

**Materia:** Adquisición de participaciones preferentes que fueron canjeadas por bonos subordinados obligatoriamente convertibles y más tarde por acciones de Banco Popular. Acciones de nulidad e indemnización de daños y perjuicios. De acuerdo con la jurisprudencia, en supuestos de canje de bonos subordinados convertibles por acciones de Banco Popular, en que las demandas habían sido interpuestas después de que las acciones hubieran perdido todo su valor en junio de 2017, en el momento en que el inversor adquirió las acciones obtuvo también el poder de libre disposición sobre ellas, inclusive su inmediata venta en el mercado de valores. Razón por la cual en este tipo de casos debe tomarse como referencia para determinar el importe del abono por equivalencia el de la cotización en el mercado oficial de valores de las acciones en la fecha en que se produjo su adquisición por el canje de los bonos convertibles.

*«La doctrina de las sentencias del TJUE de 5 de mayo de 2022 y 5 de septiembre de 2024 carece de incidencia en la resolución del presente recurso de casación, por las razones que exponemos a continuación.*

*En resoluciones anteriores, en que también se ejercitaban acciones de nulidad por error vicio o de responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones de información y asesoramiento en la comercialización de productos financieros equivalentes al de este caso (instrumentos de capital adicional de nivel 1 emitidos por el Banco Popular, que antes de la decisión de resolución del banco se habían canjeado en acciones de Banco Popular), apreciamos de oficio la falta de legitimación de los demandantes en aplicación de la doctrina contenida en las sentencias del TJUE de 5 de mayo de 2022 y 5 de septiembre de 2024.*

*Así en la sentencia 113/2025, de 22 de enero, concluimos que «sí, como afirma el TJUE, la Directiva 2014/59 impide el ejercicio de una acción de responsabilidad o de una acción de nulidad contra la entidad de crédito que comercializó las participaciones preferentes (convertidas en deuda subordinada y luego en acciones), o contra la entidad que la suceda con posterioridad a la adopción de la decisión de resolución, desaparece ese presupuesto esencial de la acción ejercitada en la demanda».*

*2. Pero esta doctrina no es aplicable al presente caso, pues la entidad demandada ni es Banco Popular ni la entidad que le sucedió con posterioridad a la adopción de la decisión de resolución (Banco Santander), sino otra entidad que con anterioridad a esa decisión de resolución sucedió a quien había comercializado estos instrumentos de capital emitidos por Banco Popular.*

*En las sentencias reseñadas sobre la falta de acción de los adquirentes de esos instrumentos de capital, el TJUE se refiere siempre a las acciones que pudieran ejercitarse contra «la entidad de crédito o la empresa de servicios de inversión objeto de resolución, o el sucesor de esas entidades», porque tales acciones tienen como efecto que se «modifique retroactivamente la composición del capital social en que se fundamenta la medida de resolución» y cuestionen «toda la valoración en la que se basa la decisión de resolución, puesto que la composición del capital forma parte de los datos objetivos de dicha valoración,*

*y, por lo tanto, podrían frustrar tanto el propio procedimiento de resolución como los objetivos perseguidos por la Directiva».*

*La privación a los adquirentes de esos instrumentos de capital de las acciones de nulidad o de indemnización que ponen en riesgo la resolución de la entidad insolvente tiene sentido cuando la acción se dirige contra la entidad objeto de resolución que ha emitido esos instrumentos de capital o la entidad que la suceda, pero no cuando se ejercita contra otras entidades distintas que comercializaron esos instrumentos de capital o sucedieron a quienes los comercializaron antes de la decisión de resolución del banco». Se desestima el recurso de casación.*

Además, se ha firmado la siguiente sentencia en materias con doctrina reiterada:

**9.- SENTENCIA 376/2025, DE 11 DE MARZO. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 339/2022**

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Votación y fallo: 05/03/2025

**Materia:** Indemnización de daños causados por la infracción del Derecho de la competencia. Cártel de los camiones. Informe pericial bastante a efectos de considerar suficiente el esfuerzo probatorio sobre la existencia del daño, pero inadecuado para establecer una concreta indemnización. Presunción del daño y estimación judicial. Reiteración de la doctrina de la sala sobre el cártel de camiones. En concreto y entre otras, de las STS 372/2024, de 14 de marzo, y 1045/2024, de 22 de julio.

**10.- SENTENCIA 398/2025, DE 13 DE MARZO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 1660/2022**

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres

Votación y fallo: 06/03/2025

**Materia:** Cláusula de gastos en contratos con consumidores. Prescripción de la acción de restitución. Reiteración de la jurisprudencia de la Sala (BBVA).

**11.- SENTENCIA 395/2025, DE 13 DE MARZO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 7523/2021**

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres

Votación y fallo: 05/03/2025

**Materia:** Cláusula de gastos en contratos con consumidores. Prescripción de la acción de restitución. Reiteración de la jurisprudencia de la Sala (BBVA).

**12.- SENTENCIA 397/2025, DE 13 DE MARZO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 8305/2021**

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres

Votación y fallo: 06/03/2025

**Materia:** Cláusula de gastos en contratos con consumidores. Prescripción de la acción de restitución. Reiteración de la jurisprudencia de la Sala (BBVA).

**13.- SENTENCIA 393/2025, DE 13 DE MARZO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 7261/2021**

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres

Votación y fallo: 05/03/2025

**Materia:** Cláusula de gastos en contratos con consumidores. Prescripción de la acción de restitución. Reiteración de la jurisprudencia de la Sala (BBVA).

**14.- SENTENCIA 394/2025, DE 13 DE MARZO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 7509/2021**

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres

Votación y fallo: 05/03/2025

**Materia:** Cláusula de gastos en contratos con consumidores. Prescripción de la acción de restitución. Reiteración de la jurisprudencia de la Sala (BBVA).

**15.- SENTENCIA 434/2025, DE 18 DE MARZO. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 2550/2022**

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Votación y fallo: 13/03/2025

**Materia:** Indemnización de daños causados por la infracción del Derecho de la competencia. Cártel de los camiones. Informe pericial bastante a efectos de considerar suficiente el esfuerzo probatorio sobre la existencia del daño, pero inadecuado para establecer una concreta indemnización. Presunción del daño y estimación judicial. Reiteración de la doctrina de la sala sobre el cártel de camiones. En concreto y entre otras, de las STS 372/2024, de 14 de marzo, y 1045/2024, de 22 de julio.

**16.- SENTENCIA 437/2025, DE 18 DE MARZO. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 2739/2022**

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Votación y fallo: 13/03/2025

**Materia:** Indemnización de daños causados por la infracción del Derecho de la competencia. Cártel de los camiones. Informe pericial bastante a efectos de considerar suficiente el esfuerzo probatorio sobre la existencia del daño, pero inadecuado para establecer una concreta indemnización. Presunción del daño y estimación judicial. Reiteración de la doctrina de la sala sobre el cártel de camiones. En concreto y entre otras, de las STS 372/2024, de 14 de marzo, y 1045/2024, de 22 de julio.

**17.- SENTENCIA 431/2025, DE 18 DE MARZO. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 6379/2021**

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Votación y fallo: 13/03/2025

**Materia:** Indemnización de daños causados por la infracción del Derecho de la competencia. Cártel de los camiones. Informe pericial bastante a efectos de

considerar suficiente el esfuerzo probatorio sobre la existencia del daño, pero inadecuado para establecer una concreta indemnización. Presunción del daño y estimación judicial. Reiteración de la doctrina de la sala sobre el cártel de camiones. En concreto y entre otras, de las STS 372/2024, de 14 de marzo, y 1045/2024, de 22 de julio.

**18.- SENTENCIA 435/2025, DE 18 DE MARZO. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 2699/2022**

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Votación y fallo: 13/03/2025

**Materia:** Indemnización de daños causados por la infracción del Derecho de la competencia. Cártel de los camiones. Informe pericial bastante a efectos de considerar suficiente el esfuerzo probatorio sobre la existencia del daño, pero inadecuado para establecer una concreta indemnización. Presunción del daño y estimación judicial. Reiteración de la doctrina de la sala sobre el cártel de camiones. En concreto y entre otras, de las STS 372/2024, de 14 de marzo, y 1045/2024, de 22 de julio.

**19.- SENTENCIA 433/2025, DE 18 DE MARZO. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 2474/2022**

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Votación y fallo: 13/03/2025

**Materia:** Indemnización de daños causados por la infracción del Derecho de la competencia. Cártel de los camiones. Informe pericial bastante a efectos de considerar suficiente el esfuerzo probatorio sobre la existencia del daño, pero inadecuado para establecer una concreta indemnización. Presunción del daño y estimación judicial. Reiteración de la doctrina de la sala sobre el cártel de camiones. En concreto y entre otras, de las STS 372/2024, de 14 de marzo, y 1045/2024, de 22 de julio.

**20.- SENTENCIA 423/2025, DE 18 DE MARZO. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 2713/2021**

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Votación y fallo: 05/03/2025

**Materia:** Validez de la estipulación del contrato privado que modifica la originaria cláusula suelo y nulidad de la cláusula de renuncia de acciones. Se reitera la jurisprudencia contenida en las sentencias de pleno de esta sala 580/2020 y 581/2020, ambas de 5 de noviembre, que siguen la doctrina del Tribunal de Justicia contenida en la sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020 y reiterada en el auto del TJUE de 3 de marzo de 2021.

**21.- SENTENCIA 436/2025, DE 18 DE MARZO. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN. NÚM.: 2727/2022**

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Votación y fallo: 13/03/2025

**Materia:** Indemnización de daños causados por la infracción del Derecho de la competencia. Cártel de los camiones. Informe pericial bastante a efectos de considerar suficiente el esfuerzo probatorio sobre la existencia del daño. Presunción del daño y estimación judicial. Mientras no se acredite que concurren circunstancias extraordinarias, propias del caso enjuiciado, debe aplicarse el porcentaje mínimo del 5%. Reiteración de la doctrina de la sala sobre el cártel de camiones. En concreto, de las SSTS 370 y 376/2024, de 14 de marzo, en relación con las SSTS 946 y 947/2023, de 14 de junio.

*Marzo 2025*